

**Expte. N° 13-04828259-2 "Julia
Brenda Estefanía c/ Gobierno de
la Provincia de Mendoza p/ Acción
Procesal Administrativa"**

Sala Primera

EXCMA. SUPREMA CORTE:

I.-Las constancias de la causa

i- La demanda

Brenda Estefanía Julia con patrocinio letrado, solicita por esta vía la anulación por ilegitimidad del Decreto N°1104/2019 emanado del Gobernador de la Provincia, incorporado en el Expediente Electrónico N° EX-2019-00880477-GDEMZA-MGTYJ y el EX - 2420-D-2018-20108 y su acumulado N°1207-D-2014-00808.

Refiere que el 26 de noviembre de 2.009 ingresó a trabajar en el Registro Civil y Capacidad de las Personas, oficina La Dormida. Que en una primera etapa tenía la calidad de pasante y luego de transcurridos tres meses, se le solicita que empiece a facturar los servicios al Registro del Estado Civil y Capacidad de Personas.

Agrega que hasta el 10 de agosto de 2011 el contrato con la Provincia de Mendoza fue renovado tácitamente y que en ese momento se renueva expresamente mediante Resolución Ministerial N°353-G y se la traslada a la Oficina de San Martín a 70 km de su domicilio, incumpliendo la cláusula de Servicios extraordinarios. Que el 8 de noviembre de 2.011 se ratifica el Decreto N°2106 (26/08/2.011) mediante Ley N°8372 publicada en el Boletín Oficial, en el cual se homologa el Acta Acuerdo de fecha 21 de junio de 2011, suscripta por ATE, UPCN, el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Hacienda,

mediante el cual llegan a un acuerdo en relación al cronograma de pase a planta permanente de contratos de Locación de Servicios. Afirma que se encontraba amparada por la normativa y debía hacerse efectivo su pase a planta permanente ya que cumplía todos los requisitos que exige el art. 10 del Decreto Ley N°560/73.

Refiere que por distintos hechos, denuncias y reclamos el 20 de marzo de 2.018 mediante Resolución N°57 del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia se dispuso la rescisión del contrato de locación de servicios celebrado entre la Provincia de Mendoza y su parte. Agrega que el Decreto N°1104/19 debe ser revocado y darse curso al pase a planta permanente.

ii.- La contestación de demanda

A fs. 28/37 contesta demanda por intermedio de apoderado Fiscalía de Estado, solicitando su rechazo.

Alega que mediante la Resolución N°057/18 se rescindió la locación prescindiendo de sus servicios, en virtud que en el expediente donde tramitaba su incorporación a planta, se sucedieron e incorporaron informes y probanzas que acreditaron que la actora tenía un desempeño negativo en el ejercicio de las obligaciones contractuales.

A fs. 49/53 se hace parte por medio de apoderado, contesta demanda y solicita su rechazo.

Afirma entre otros argumentos, que estamos en presencia de una rescisión contractual con causa, debidamente acreditada y prevista en el contrato y no en una renovación del contrato. Agrega que resultan debidamente motivados y legítimos los actos impugnados mediante la presente acción.

II- Consideraciones

Tal como ha quedada trabada la litis corresponde determinar si el acto administrativo atacado resulta legítimo o ilegítimo y en este último caso si el mismo adolece de un vicio grave o grosero a fin de establecer si su revocación correspondía o no a la autoridad administrativa.

Ello por cuanto "Si bien el principio general establecido por el derecho administrativo permite que la administración contrate personal que carezca de estabilidad y lo organice de acuerdo con las características de sus servicios atendiendo a la transitoriedad del requerimiento, la solución de cada caso en particular está condicionada por la naturaleza de la vinculación del actor con la demandada y requiere, en consecuencia, el examen de la legislación que rige a ésta y de la conducta desarrollada por las partes durante la vinculación, ya que de ambos extremos puede resultar el carácter del empleo cuya terminación motiva el pleito" (CSJN "Bolardi, Guillermo c/ Estado Mayor General del Ejército. Instituto Geográfico Militar", 27/12/88. Fallos 311:2799).

De las actuaciones administrativas ofrecidas como prueba se advierte la existencia de informes que acreditan diferentes incumplimientos, inasistencias injustificadas de la accionante, que motivan la rescisión contractual de la parte actora con la parte demandada.

Que en base a las pruebas ofrecidas y rendidas en las actuaciones administrativas, la autoridad administrativa revocó la designación, ejerciendo una facultad discrecional prevista en la normativa, habiendo tenido oportunidad la parte actora de ejercer su derecho de defensa.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, este Ministerio Público Fiscal entiende que el acto atacado resulta suficiente en cuanto a los hechos que lo sustentan, relativos a la falta de idoneidad de la agente, por lo que correspondería rechazar la presente acción.

III.- Dictamen

Por tanto procede que V.E. desestime la acción intentada por Julia Brenda Estefanía conforme las consideraciones vertidas en el acápite II.

Despacho, 15 de junio de 2.023.